

¿Dónde está la raya?

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parece que juega con nosotros al pasatiempo infantil del *veo, veo*. Encaramado a su atalaya de Moncloa nos anuncia periódicamente que atisba el comienzo del fin de la violencia terrorista etarra. Sus predecesores, Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar, también tuvieron la misma visión y trataron de explorar ese mismo territorio porque pensaron sucesivamente que allí se escondían grandes bienes para el conjunto de la ciudadanía asentada en el País Vasco y en toda España, además de consecuencias electorales muy productivas para sus colores políticos, amén de la garantía de pasar a la historia en letras mayúsculas. El hecho es que ahora, de nuevo, tenemos a ETA en cabeza de la agenda política.

Todos los pactos de las fuerzas políticas democráticas suscritos para terminar con la lacra del terror han reconocido que la dirección y la iniciativa en este campo corresponden al Gobierno. Así fue cuando los intentos de Adolfo Suárez a través de los militares del Cesid. Así sucedió cuando Juan José Rosón, ministro del Interior con Leopoldo Calvo-Sotelo Suárez, acordó el desistimiento de ETA político-militar con Juan María Bandrés y Mario Onaindía. Así figuraba en los Pactos de Ajuria Enea, de Madrid y de Pamplona, suscritos por todos los partidos con representación parlamentaria en tiempos de Felipe González. También le reconoce esas atribuciones al Gobierno el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, una iniciativa del PSOE adoptada por el PP en tiempos de José María Aznar.

Nadie discutió al Gobierno socialista su capacidad para concertar encuentros con los representantes de la banda en Argel en 1989, donde estuvo representado por Rafael Vera y Juan Manuel Eguigaray. Tampoco nadie cuestionó al Gobierno popular el encuentro de Zúrich en 1999, en cuya delegación se incluyó a un contratado del PP para las encuestas electorales. Sabemos que antes de Argel el ministro del Interior Corcuera informó al líder de AP, Manuel Fraga, quien sólo preguntó qué quería el Gobierno que dijera o hiciera. Sabemos también que de nada se informó a Joaquín Almunia, a la sazón secretario general del PSOE, cuando Zúrich, sin que tomara represalia dialéctica alguna.

En cuando a los medios de comunicación, cerraron filas sin excepciones, cualesquiera que fuesen sus afinidades políticas. El 4 de noviembre de 1998, al informar de que Aznar movía ficha para autorizar la apertura de "contactos secretos" con el entorno de ETA, nadie invocó para nada a las víctimas.



Manifestación de víctimas del terrorismo. / LUIS MAGÁN

No hubo tampoco entonces guerra de opinión. Todos los medios estuvieron en el mismo bando para favorecer el desistimiento de los terroristas que el Gobierno creía vislumbrar. El editorial de *Abc* de aquel día se titulaba: *Horizonte de esperanza*; el de *El Mundo*: *Otro valiente paso de Aznar hacia la paz*. Excuso decir que la cuestión en ningún momento —ni antes, ni durante, ni después— tomó estado parlamentario.

Entre tanto, Aznar se refería a los asesinos como "Movimiento de Liberación Nacional Vasco", se supone que para predisponerles, y el ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, respondía a los periodistas que se podía hablar de muchas cosas con los inminentes interlocutores etarras y mencionaba, entre otros asuntos, el de la autodeterminación. En realidad, esa era una cuestión resuelta y entregada por Jota Pedro en Bilbao cuando presentó el "Gran Atlas Histórico del Mundo Vasco". Veán la frase entrecuadrada con la que titulaba su periódico del 25 de febrero de 1994 el resumen de sus palabras: "Los vascos tienen derecho a la autodeterminación". Dos días después, en la homilía dominical acostumbrada, volvía a defender el inalienable derecho de autodeterminación de los pueblos y avanzaba que nada tendría que oponer si limpia y democráticamente el País Vasco optara un día por la separación del resto de España.

El ahora guardián insobornable de las esencias patrias, decía entonces también que "bajo sus expresiones más terribles el problema vasco tiene unas raíces históricas tan profundas que sólo será posible solventarlo desde la audacia política". De ahí que recordara otro artículo titulado "Un noruego para ETA", en el que proponía "una vía de negociación tan secreta y remota como la que Israel y la OLP desarrollaron en Oslo". ¿Dónde está la raya?, preguntarán los ingenuos. La raya se mueve con el PP, que es el camino, la verdad y la vida.

NATIVIDAD RODRÍGUEZ / Presidenta de la Fundación Fernando Buesa

“La estrategia del PP con las víctimas es partidista y de poder”

ISABEL C. MARTÍNEZ. **Vitoria** Mañana se cumplen seis años del asesinato del dirigente socialista y ex *vicelehendakari* Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez. La viuda de Buesa, Natividad Rodríguez, afronta esa fecha difícil y analiza el papel de las víctimas en un eventual proceso de paz.

Pregunta. ¿Cuál es su estado de ánimo ante el aniversario?

Respuesta. El mes de febrero es para mí una pesadilla. En realidad, empieza en Navidades, que son muy duras, y ya sé que hasta que no pasa febrero tendré un nubarrón encima. Por muchos años que pasen.

P. ¿El juicio y condena de los asesinos ha cambiado algo?

R. Sí, me alivia, no por venganza, sino porque quiero justicia, por mis hijos y mis nietos, por Fernando, por los amigos, por la sociedad, por todos.

P. No quiso ir a los juicios de los asesinos de su marido.

R. No. Estaba el abogado de la familia y yo confío en la justicia. No quería hacerme más daño, ni envenenar mis sentimientos. Bastantes malos ratos tengo, así que me evito más y no tengo ningún interés en ver a esas personas.

P. ¿Cómo vive todo el ruido en torno a las víctimas?

R. Lo vivo mal desde hace tiempo ya. Parece que el enemigo común de Gobierno y oposición era ETA sólo mientras gobernaba el PP. No niego lo que hicieron, pero fue con el apoyo del PSOE, que no se olvide. Todo cambia cuando el 14-M pierden las elecciones. Me sabe muy mal que su actitud ahora sea deslegitimar al Gobierno, me parece francamente sucio.

P. ¿Se equivocó el presidente del Gobierno al no acudir al congreso de víctimas en Valencia?

R. No sé por qué no iría el presidente, pero yo tampoco fui. Asistí hace dos años y no me gusta que me manipulen. Me desilusionó mucho y me sentí utilizada. Las víctimas no fueron las protagonistas y todo fue a mayor gloria de Aznar y sus ministros. Volví absolutamente desfondada.

P. Pero los grandes colectivos de víctimas parecen más cerca del PP que del Gobierno.



Natividad Rodríguez.

“No fui al congreso de víctimas de Valencia porque en el anterior, al que asistí ilusionada, me sentí utilizada”

R. Yo comprendo la rabia acumulada de las víctimas por muchos años de olvido. Otra cosa es lo que hace el PP, hostigar desde fuera esos sentimientos legítimos para fomentar la división y tratar de ganar votos. Eso es una estrategia exclusivamente partidaria, trazada en claves de poder, que se explica por su derrota el 14-M y que el PP no va a variar hasta que verifique su resultado en unas elecciones, si antes no hay acontecimientos que la echen abajo, como un final de ETA.

P. ¿Cómo se sitúa ante ese eventual fin del terrorismo?

R. Creo que ETA ha interiorizado ese final y que no tiene marcha atrás. La clave, por tanto, no es el qué, sino el cómo y no sólo en relación con las víctimas, sino con la sociedad entera: ETA tiene que salir derrotada, porque si no, no nos vamos a poder mirar a la cara, no podremos construir una sociedad decente. A mí me

parece clarísimo que tiene que haber vencedores y vencidos, esto no se puede acabar en un empate.

P. ¿Qué papel deben tener las víctimas en un proceso de paz?

R. Se nos debe oír y consultar y podemos opinar a título individual y defender nuestro significado político. Otra cosa es usurpar la representación de un colectivo para apoyar a un partido. Las asociaciones están para defender la dignidad y la memoria de todas las víctimas, no para marcar la política de los Gobiernos. Y este Gobierno tiene legitimidad para intentar la paz, como la tuvo el del PP y le apoyamos. Es una cuestión de confianza en el sistema y en que las decisiones de los políticos tendrán siempre un soporte ético, más aún ante un problema como éste.

P. ¿Y cómo se da ese papel político a las víctimas sin a la vez utilizarlas políticamente?

R. Con el Estado de derecho por delante, con el acuerdo del Congreso de los Diputados que exige un cese definitivo de las armas para abrir un proceso de paz. Si eso no fuera así, yo me sentiría engañada, pero en tanto eso no ocurra, yo tengo que creer que el Estado de derecho y la democracia van a funcionar y que no pueden funcionar en contra de las víctimas. Que no puede haber ahora un cambalache de paz por presos.

P. ¿Cuándo dice ahora quiere decir que es cuestión de tiempo?

R. Estoy convencida de que los sentimientos de las víctimas cambiarán una vez nos aseguremos la paz. Primero tienen que dejar las armas y arrepentirse. Después, cuando llevemos años sin violencia, hayan entregado las armas, se levanten las escoltas, la gente viva libre, los que se han ido puedan volver y no haya miedo de que te quemen la empresa y tus hijos puedan hablar con naturalidad de todo, entonces, podrán contemplarse otras cuestiones, sin necesidad de que sea el perdón de las penas, porque impunidad no puede haber. Lo que sienten ahora las víctimas no será lo mismo después de 10 años de paz, pero los terroristas quieren empezar por el final.

López Aguilar ordena destinar a fines sociales dos millones de euros de Batasuna

J. M. LÁZARO. **Madrid** El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha dado instrucciones al abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají para que ponga a disposición de la Sala Especial del Tribunal Supremo, encargada de aplicar la ley de Partidos Políticos, más de dos millones de euros que el Estado debía a la ilegalizada Batasuna, para que sean destinados a actividades de interés social o humanitario.

El Estado debe a Batasuna más de dos millones de euros correspondientes a las subvenciones electorales por los votos obtenidos en los comicios de 22 de junio de

1986 y de 29 de octubre de 1989. El Estado retuvo esas subvenciones pero, tras sucesivos recursos de Batasuna, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dio la razón a la formación *abertzale*.

Sin embargo, después sobrevino la ilegalización de Batasuna, por lo que el ministro de Justicia ha dado instrucciones ahora para que el pago se destine a actividades de interés humanitario, entre las que previsiblemente figurarán dotaciones para las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Según las previsiones del artículo 12 c) de la Ley de Partidos Políti-

cos, la disolución de un partido "determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora", es decir, la Sala Especial del Tribunal Supremo que preside el presidente del alto Tribunal e integrada por 16 magistrados.

El mismo artículo establece que "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario". Batasuna fue disuelta en 2003 y su "muerte civil" ha sido declarada por el Tribunal Constitucional.